

# AMNISTÍA INTERNACIONAL

## Declaración pública

Índice AI: ASA 39/015/2006 (Público)

Servicio de Noticias: 275/06

24 de octubre de 2006

<http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA390152006>

## Tailandia: El nuevo gobierno debe garantizar la justicia en torno a Tak Bai

### Declaración conjunta de Amnistía Internacional y Human Rights Watch

(Londres, 24 de octubre de 2006) – En el segundo aniversario de la muerte de más de 80 manifestantes musulmanes durante las protestas antigubernamentales de Tak Bai, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido al nuevo gobierno de Tailandia que haga rendir cuentas a los responsables de las muertes y heridas causadas durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad tailandesas y después de él.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado también su honda preocupación por el homicidio, la semana pasada en el sur de Tailandia, de un defensor de los derechos humanos musulmán que había participado activamente en la campaña legal para que se haga justicia para las víctimas de Tak Bai.

El 25 de octubre de 2004 se movilizó a personal de seguridad de diversas unidades para dispersar a los manifestantes musulmanes congregados ante una comisaría del distrito de Tak Bai, en la provincia meridional de Narathiwat. Siete manifestantes murieron a tiros allí mismo, mientras otros 78 murieron asfixiados o aplastados cuando los transportaban a centros de detención. Unas 1.200 personas permanecieron recluidas bajo custodia militar durante varios días sin atención médica adecuada. A consecuencia de todo ello, muchos manifestantes sufrieron heridas graves que obligaron a amputarles algún miembro.

Ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha rendido cuentas en relación con los sucesos de Tak Bai, pero sí se acusó de delitos a 58 manifestantes musulmanes.

“Pese a las abrumadoras pruebas, el gobierno de Thaksin se negó a procesar a los responsables de las muertes y heridas de Tak Bai y a indemnizar adecuadamente a las víctimas”, ha manifestado Brad Adams, director de Human Rights Watch para Asia. “Si el nuevo gobierno tailandés quiere demostrar que la justicia en el sur es una prioridad, el abordar los hechos de Tak Bai será una prueba fundamental.”

El comité de investigación designado por el gobierno y encabezado por el Defensor del Pueblo Parlamentario, Pichet Soontornpiphit, concluyó el 17 de diciembre de 2004 que los métodos utilizados para dispersar a los manifestantes (incluidos el uso de armas de fuego y munición real y el despliegue de reclutas y soldados sin experiencia en dispersar manifestantes) habían sido inadecuados y no habían cumplido las directrices y prácticas internacionales establecidas. Asimismo concluyó que los oficiales al mando no habían supervisado el transporte de manifestantes a los centros de custodia, y habían dejado esta tarea en manos de personal de baja graduación sin experiencia. En concreto, se identificó al comandante y subcomandante de la Cuarta Región Militar y al comandante de la Quinta División de Infantería como responsables de no haber vigilado y supervisado adecuadamente la misión que habían confiado a sus subordinados.

Las autoridades han indemnizado económicamente a algunas de las víctimas de Tak Bai y a sus familias. Sin embargo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional consideran que esa indemnización no es suficiente.

“El dar dinero a algunas de las víctimas no exime a las autoridades tailandesas de su responsabilidad de procesar a los responsables de los homicidios ilegítimos de Tak Bai y de las muertes causadas por los atroces malos tratos infligidos durante el transporte”, ha manifestado Natalie Hill, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “La Fiscalía General debe anunciar que iniciará actuaciones contra el personal de seguridad responsable de las muertes y heridas ocurridas durante la manifestación y después de ella.”

La necesidad urgente de justicia en el sur del país ha quedado aún más patente con el homicidio de un defensor de los derechos humanos musulmán que había participado activamente en la campaña legal para pedir a las autoridades tailandesas justicia para las víctimas de Tak Bai. El 20 de octubre de 2006, Muhammad Dunai Tanyeen, jefe de un poblado, de 40 años de edad, fue muerto a tiros cerca de su casa del pueblo de Mu 1 Jaroh, subdistrito de Paiwan, distrito de Tak Bai, provincia de Narathiwat. Según los informes, el asesinato de Muhammad Dunai se produjo después de que este activista tratara de llevar a algunas de las víctimas de Tak Bai y sus familias a entrevistarse con el recién designado comandante de la Cuarta Región Militar. Human Rights Watch y Amnistía Internacional sienten honda preocupación por este reciente homicidio, y piden a las autoridades que inicien una investigación imparcial, independiente y efectiva.

Entre la población musulmana de las provincias fronterizas del sur de Tailandia, el homicidio de Muhammad Dunai Tanyeen se ha recibido como otro fuerte golpe a su deteriorada confianza en el proceso legal y judicial.

Las constantes violaciones de derechos humanos y el clima de impunidad contribuyen a una atmósfera en la que la reconciliación parece difícil y en la que los abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados van también en aumento. Los ataques con bombas, los tiroteos y las decapitaciones de civiles y funcionarios gubernamentales por parte de grupos armados en los últimos dos años han dado lugar a centenares de muertes y heridas. Al mismo tiempo, según los informes, el resentimiento con las autoridades está provocando un aumento del apoyo a los grupos armados. Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan a los grupos políticos armados a cesar inmediatamente todos los ataques contra civiles y todos los demás abusos contra los derechos humanos.

La población del sur y los observadores nacionales e internacionales han dicho a las autoridades tailandesas que un elemento fundamental para recuperar la confianza de las provincias de la frontera sur es el compromiso demostrable de hacer rendir cuentas de sus actos a los funcionarios que cometen abusos. Sin embargo, tal como ha dejado patente el incidente de Tak Bai, el sistema de justicia ya ha eludido su deber de hacer rendir cuentas a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos.

A este respecto, Human Rights Watch y Amnistía Internacional instan a que se derogue el Decreto de Emergencia sobre Administración Pública en Situaciones de Emergencia, emitido por el entonces primer ministro Thaksin Shinawatra en julio de 2005 y renovado el 18 de octubre de 2006. La sección 17 de ese decreto establece inmunidad de procesamiento penal, civil y disciplinario a los funcionarios que actúen en virtud de él. El decreto hace recaer en el denunciante la carga de demostrar que los funcionarios en cuestión no actuaron de buena fe sino de forma discriminatoria e irrazonable.

En su discurso inaugural, el nuevo primer ministro, el general Surayud Chulanont, señaló que los problemas en las provincias de la frontera sur tenían su base principal en la ausencia de justicia.

“Nos alegra que el gobierno haya reconocido este problema”, ha manifestado Natalie Hill. “El gobierno provisional y las autoridades militares deben tomar ahora medidas concretas para poner fin a la cultura de la impunidad en el sur de Tailandia.”